



3358-34.  
1a. Of. Mayor.

México, Distrito Federal. Segunda Sala. Acuerdo del día 18 dieciocho de febrero de 1938 mil novecientos treinta y ocho.

V I S T O en revisión el juicio de amparo promovido por la señora Leonor Azueta viuda de Ugarte, por su apoderado el señor Gonzalo Zorrilla, ante el ciudadano Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, contra actos del Gobernador y del Congreso del mismo Estado, del Administrador de Rentas, Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Presidente Municipal en Pánuco, de dicha Entidad, violatorios de los artículos catorce, 16 dieciséis y 27 veintisiete constitucionales; y

#### R E S U L T A D O :

PRIMERO.- Son actos reclamados en este amparo: a), - la tramitación de la solicitud hecha al Gobernador del Estado de Veracruz para que se expropiaran a la quejosa 139 ciento treinta y nueve hectáreas de los terrenos correspondientes al predio denominado "La Campana", ubicado en la Congregación de Buena Vista del Municipio de Pánuco, Veracruz, y se dieran en posesión a un grupo de campesinos del Comité Particular Administrativo Agrario de la misma Congregación, aplicando las leyes 323 trescientos veintitrés de 22 veintidós de julio de 1930 mil novecientos treinta, y 269 doscientos sesenta y nueve de 15 quince de agosto de 1931 mil novecientos treinta y uno; b), la posesión que se pretende dar a los peticionarios de las 139 ciento treinta y nueve hectáreas; c), - las anotaciones marginales que pretende hacer el Administrador de Rentas de Pánuco, en su carácter de Encargado del Registro Público de la Propiedad, en el correspondiente Libro, de la propiedad afectada; d), la suspensión de todo movimiento catastral y cobro de contribucio

nes con respecto a dicha propiedad, o sean las 139 --  
ciento treinta y nueve hectáreas de los terrenos pro-  
piedad de la señora Azuela viuda de Ugarte; e), la --  
ejecución que el Presidente Municipal de Pánuco pre-  
tende dar al acuerdo del Gobernador del Estado, para-  
que se dé a los peticionarios la posesión de las tie-  
rras de la misma señora, y f), cualquier otro acto --  
que tienda a privarla de sus derechos y posesiones. --  
Se exponen como "Hechos" en la demanda: que la señora  
Leonor A. viuda de Ugarte, es dueña, y está en pose-  
sión de 139 ciento treinta y nueve hectáreas de los --  
terrenos correspondientes al predio denominado "La --  
Campana" en la Congregación de Buena Vista del Municipi-  
pio de Pánuco, Veracruz, y las cuales están totalmen-  
te cultivadas y aprovechadas por ella; que la Legisla-  
tura del Estado de Veracruz expidió las siguientes Le-  
yes de Expropiación: 15 quince de agosto de 1931 mil-  
novecientos treinta y uno; 22 veintidós de julio de --  
1930 mil novecientos treinta; lo. primero de junio de  
1932 mil novecientos treinta y dos y 21 veintiuno de-  
marzo de 1929 mil novecientos veintinueve, las cuales  
sancionó y promulgó el Gobernador; que fundándose en-  
las Leyes de Expropiación 269 doscientos sesenta y --  
nueve y 323 trescientos veintitrés, un grupo de campe-  
sinos del Comité Particular Administrativo Agrario de  
Buena Vista, solicitaron, por causa de utilidad públi-  
ca, la expropiación de 139 ciento treinta y nueve hec-  
táreas de los terrenos correspondientes al predio de-  
nominado "La Campana" de la propiedad de la quejosa, --  
y que el Gobernador inició el procedimiento de expro-  
piación sin haberse llenado previamente los requisi-  
tos establecidos en los artículos 9o. noveno y 10o. --  
décimo de la Ley 323 trescientos veintitrés, y sin --



oírle en defensa ha hecho la declaración de expropiación, y mandado se dé posesión a los peticionarios de las tierras expropiadas, debiéndose registrar ésta en el Registro Público de la Propiedad de Pánuco; que la propiedad de que se pretende expropiarla está destinada a fines petroleros y amparada por una concesión para la explotación y exploración del subsuelo; que el amparo se pide, tanto contra la autoridad que dictó el auto inconstitucional, como contra las autoridades que lo ejecutan, y por esta razón la demanda se enderaba contra el Gobernador del Estado de Veracruz, la Legislatura de la misma Entidad y el Administrador de Rentas, Encargado del Registro Público de la Propiedad en Pánuco. Como fundamentos de "Derecho" se expresan: que las Leyes números 269-doscientos sesenta y nueve y 323 trescientos veintitrés de julio de 1930 mil novecientos treinta, la número 66 sesenta y seis de lo primero de junio de 1932 mil novecientos treinta y dos, la de 21 veintiuno de marzo de 1929 mil novecientos veintinueve y sus reformas, y la de seis de agosto del mismo año, son inconstitucionales, porque violan lo dispuesto en el artículo 27 veintisiete, por imponer modalidades a la propiedad; que es inconstitucional la aplicación que ha hecho el Gobernador de los artículos 11 once, 12 doce, 21 veintiuno y 22 veintidós de la Ley de 22 veintidós de julio de 1930 mil novecientos treinta, y la de 15 quince de agosto de 1931 mil novecientos treinta y uno, porque están en pugna con el artículo 27 veintisiete constitucional; que hay invasión de las facultades expresamente reservadas a la Federación, porque sólo a ésta corresponde legislar en materia agraria, y la aplicación de las leyes 269 doscientos sesenta y nueve y 323 trescientos veintitrés son leyes da-

das para dotación de ejidos; que ha habido invasión -  
de funciones porque la propiedad de la quejosa está -  
amparada por un título de concesión para la explota -  
ción y exploración del subsuelo con fines petroleros,  
y según el artículo 30. tercero de la Ley de Petróleo  
y el artículo 126 ciento veintiséis de su Reglamento,  
la industria petrolera está considerada como de utili -  
dad pública y tiene preferencia a cualquiera otra -  
aplicación, por lo que las autoridades responsables -  
han invadido funciones de la Federación.

SEGUNDO.- El Administrador de Rentas de Pánuco y  
Encargado del Registro Público de la Propiedad, niega  
en su informe con justificación haber anotado margi -  
nalmente en el Libro de Registro el procedimiento de -  
expropiación a que alude la quejosa, no habiendo tam -  
poco suspendido ningún movimiento catastral ni cobro -  
de contribuciones en bienes del mismo. El Síndico del  
Ayuntamiento de Pánuco en su informe con justifica -  
ción, dice desconocer la existencia de solicitud algu -  
na de tierras hecha por los componentes del Comité -  
Particular Administrativo Agrario de Buena Vista, y -  
que no existe orden del Superior Gobierno del Estado -  
para poner en posesión a los mencionados de las 136 -  
ciento treinta y seis hectáreas de tierras del predio  
rústico de "La Campana", propiedad de la quejosa. El -  
Gobernador del Estado niega en su informe con justifi -  
cación haber dictado resolución o acuerdo por virtud -  
del cual, en ejecución de las Leyes de 22 veintidós -  
de julio de 1930 mil novecientos treinta y 6 seis de -  
julio de 1932 mil novecientos treinta y dos, se haya -  
decretado la expropiación de las tierras denominadas -  
"Potrero de La Campana" o "Tierras de Buena Vista", -  
pertenecientes a la quejosa; que tampoco ha dictado -



- 3 -

resolución o acuerdo alguno por el que se haya perturbado, o trate de perturbarse a la quejosa en la posesión de las tierras de que se trata; que el Gobierno recibió con fecha 13 trece de septiembre de 1934 mil novecientos treinta y cuatro una solicitud de José Aguilar, Presidente del Comité Particular Administrativo Agrario para que se expropiaran 139 ciento treinta y nueve hectáreas del predio rústico denominado "La Campana" y "Buena Vista", para crear el patrimonio familiar de los solicitantes; - que debe sobreseerse en el juicio por ser improcedente, porque la Suprema Corte ha determinado que es improcedente el amparo contra una ley en general, a menos que contenga en sí misma principio de ejecución, caso en el que no se encuentran las que se reclaman; que también es improcedente el amparo y debe sobreseerse, porque no existe acto alguno de aplicación de las mismas leyes, ni siquiera acto por el cual el Ejecutivo haya privado o perturbado a la quejosa en sus derechos de propiedad o posesión; que en cuanto a los actos del Gobierno consisten en los acuerdos que el Departamento ha dictado para tramitar la solicitud a que se ha aludido, el amparo es también improcedente porque no ha recaído, como resultado de los citados acuerdos, una resolución expropiatoria, que aún no se dicta, ni se sabe si llegará a dictarse, por lo que no causa a la quejosa perjuicio alguno. El Congreso del Estado de Veracruz dice en su informe con justificación, que el acto que se reclama de ese Poder es la expedición de las Leyes de 15 quince de agosto de 1931 mil novecientos treinta y uno, 22 veintidós de julio de 1930 mil novecientos treinta, lo primero de junio de 1932 mil novecientos treinta y dos, 21 veintiuno de marzo de 1929 mil novecientos veintinueve, con sus re

formas, y de 6 seis de agosto del mismo año, la que --  
hizo con la facultad que tiene para dictar leyes de --  
interés general, sin más límites que los que le demar --  
can las constituciones General y local; que la legis --  
lación impugnada no infringe disposición alguna de --  
aquellas leyes fundamentales, sino que reglamenta la --  
fracción VII séptima, segundo párrafo, del artículo --  
27 veintisiete del Pacto Federal, determinando casos --  
de ocupación de la propiedad privada; que según la --  
opinión de la Suprema Corte, en el sentido de que por --  
inconstitucionales que sean las leyes no pueden ser --  
anuladas por el Poder Judicial de la Federación, el --  
acto reclamado debe apreciarse bajo el aspecto de una --  
ejecución concreta, y la misma Suprema Corte en la ju --  
risprudencia visible en el epígrafe de "Amparo contra --  
una ley" declara que son improcedentes los amparos --  
que se instauren contra leyes en general, los que de --  
berán sobreseerse, y esto no es mas que la consecuen --  
cia obligada de los razonamientos con los que se ha --  
comentado la fracción I primera del artículo 107 cien --  
to siete constitucional; que nada hay en la legisla --  
ción que induzca a afirmar la tesis del promovente de --  
que el espíritu de las leyes de expropiación locales --  
son anticonstitucionales, porque el espíritu de ellas --  
es la tendencia a efectuar dotaciones de ejidos, fa --  
cultad que radica efectivamente en la autoridad fede --  
ral, en tanto que para proporcionar un fundo legal a --  
un núcleo de población se requiere otro procedimiento --  
de competencia local; que por lo que hace a la "inter --  
ferencia" de los conceptos de utilidad pública conte --  
nidos en la Ley del Petróleo y en los enumerados en --  
las leyes que dan margen al amparo, ésta sería induda --  
blemente el resultado de una comparación que daría --



preferencia a los conceptos enumerados en las leyes locales.

TERCERO.- El Agente del Ministerio Público pidió - se sobreseyera en el juicio, y, celebrada la audiencia, en la cual el ciudadano Juez de Distrito acordó se tuvieran como pruebas de la quejosa las documentales consistentes en la escritura de propiedad de los terrenos de "La Campana" y en el título de condición confirmatoria número 955 novecientos cincuenta y cinco, concedida por el Gobierno Federal para la explotación y exploración del petróleo, y recibida la prueba testimonial en la misma audiencia, fallo sobreseyendo contra actos de la Legislatura del Estado, Encargado del Registro Público de la Propiedad y Presidente Municipal de Pánuco, y concedió el amparo contra actos del Gobernador, consistentes en haber ordenado la tramitación de la solicitud presentada por el Presidente del Comité Particular Administrativo Agrario de la Congregación de Buena Vista para la expropiación y fraccionamiento de 139 ciento -- treinta y nueve hectáreas del predio "La Campana", para la creación y fomento de la pequeña propiedad, y en todos los demás actos relacionados que tiendan a despo -- searla de dichas tierras. Inconforme el Gobernador interpuso el recurso de revisión expresando agravios, y el Agente del Ministerio Público Federal pidió se revocara la sentencia que se revisa y se sobreseyera en el juicio; y

#### CONSIDERANDO :

Los agravios expresados por el Gobernador del Estado de Veracruz se hacen consistir, en que siendo el elemento perjuicio esencial para la procedencia del amparo, ninguno se ha seguido a la quejosa porque apenas se está tramitando el expediente administrativo; que la "inter-

ferencia" de los conceptos de utilidad pública petrolera, y de utilidad pública agraria, puede ser planteada en el mismo expediente administrativo para que se tenga en cuenta al dictar la resolución definitiva, a fin de que se decida a cuál de esos dos conceptos debe darse preferencia, pero si todavía la autoridad del orden común competente no ha decidido nada - a este respecto, la acción de la autoridad federal, - dejándose sentir antes de la de aquélla, y sustituyéndose así a las autoridades del Estado, sería absurda y violatoria de la soberanía de esta Entidad; - que aceptando que pudiera tratarse de la cuestión de fondo, de todos modos debió negarse a la quejosa la protección de la Justicia Federal porque aun cuando el artículo 30. tercero de la Ley que cita el juez - en el considerando sexto de su fallo establezca el principio de que la industria petrolera es de utilidad pública, dicha disposición contraría abiertamente los conceptos de utilidad pública que contiene el artículo 27 veintisiete constitucional, o mejor dicho, que convergen todos a la resolución del problema agrario. La Sala no entra al estudio de estos - - agravios por existir un motivo de improcedencia que ante todo debe examinarse para los efectos del sobreseimiento. La quejosa expresó como acto reclamado en su demanda de amparo, que el Gobernador del Estado - de Veracruz a solicitud de un grupo de campesinos -- del Comité Particular Administrativo Agrario de "Buena Vista", en jurisdicción de Pánuco, Veracruz, ha iniciado el procedimiento para expropiarla de 139 -- ciento treinta y nueve hectáreas del predio denominado "La Campana", aplicando la Ley número 269 doscientos sesenta y nueve de 15 quince de agosto de 1931 - mil novecientos treinta y uno, y los artículos 10 y -





11 once de la Ley número 323 trescientos veintitrés de 22 veintidós de julio de 1930 mil novecientos treinta, y ha ordenado al Presidente Municipal que proceda a dar posesión a los peticionarios. En el punto III tercero, letra a), la quejosa reitera la expresión del acto reclamado, haciéndolo consistir en la tramitación de la solicitud que los campesinos de Pánuco hicieron al Gobernador del Estado para que la expropiara de 139 ciento treinta y nueve hectáreas de terrenos correspondientes al predio denominado "La Campana" ubicado en la Congregación de "Buena Vista" Jurisdicción del citado Municipio de Pánuco. En el capítulo de "Derecho" dice la quejosa que el Gobernador inició el procedimiento sin haberse llenado los requisitos establecidos en los artículos 9o. noveno y 10 décimo de la Ley número 323 trescientos veintitrés, y por oficio está citándola para que en el término de cinco días rinda las pruebas que le con vengan. El Gobernador en su informe con justificación expresa, que no ha dictado resolución, ni acuerdo alguno por virtud del cual en ejecución o aplicación de las leyes números 323 trescientos veintitrés de 22 veintidós de julio de 1930 mil novecientos treinta y 119 ciento diecinueve de 6 seis de julio de 1932 mil novecientos treinta y dos, haya decretado la expropiación de las tierras denominadas "Potrero de la Campana" o "Tierras de Buena Vista", y tampoco ha dictado resolución alguna por la que se haya perturbado, o se trate de perturbar a la recurrente en la posesión de las tierras, y que a la solicitud de José Aguilar, Presidente del Comité Particular Administrativo Agrario, y miembros del mismo, no le ha recaído hasta la fecha en que rinde su informe con justificación, resolución alguna, y siendo por tanto improcedente el juicio debe sobreseerse por -

no ser acto perjudicial el reclamado por la quejosa. La procedencia del sobreseimiento es patente, porque como consta de los datos tomados del escrito de demanda de amparo y del informe con justificación del Gobernador, resulta que la solicitud de los campesinos de "Buena Vista" está en trámite, que el Gobierno del Estado no ha dictado ninguna resolución, y que la Suprema Corte de Justicia no sabe en qué sentido habrá de ser dictada, y tampoco si el mismo Gobierno va a tener en cuenta la defensa que ante él haga la concesionaria en el sentido de que está explotando los terrenos para la industria del petróleo. Si el Gobernador del Estado de Veracruz no ha dictado resolución alguna de expropiación, y menos ha podido ser ésta ejecutada por el Presidente Municipal de Pánuco, no se ha afectado a la quejosa en sus intereses por no perjudicarle el acto que reclama, como se previene en la fracción IV cuarta del artículo 74 setenta y cuatro de la Ley de Amparo, y el juicio de garantías sólo es fundado cuando los actos que se reclaman de una autoridad constituyen un perjuicio directo e inmediato. Improcedente por esas razones el juicio de amparo debe sobreseerse en él con fundamento en la citada fracción IV cuarta del artículo 74 setenta y cuatro.

En virtud de no haber sido recurrido el segundo punto resolutivo de la sentencia que se revisa y que sobreseyó en el juicio respecto de la Legislatura del Estado de Veracruz, Encargado del Registro Público de la Propiedad y Presidente Municipal de Pánuco, la Sala no entra al estudio de esta cuestión, por lo que debe quedar firme en esta parte dicha sentencia.



Cotejado.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 103 ciento tres, fracción I primera, y -- 107 ciento siete, fracción IX novena, de la Constitución General de la República, se resuelve:

PRIMERO: Se revoca, en el punto sujeto a revisión, la sentencia pronunciada por el ciudadano Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con fecha 27 veintisiete de abril de 1934 mil novecientos treinta y cuatro.

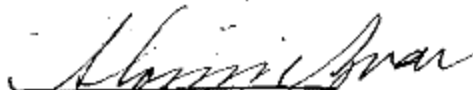
SEGUNDO: Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la señora Leonor Azuela viuda de Ugarte, contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz, consistentes en la admisión y acuerdo de tramitación de la solicitud presentada por José Aguilar, Presidente del Comité Particular Administrativo Agrario de la Congregación de Buena Vista", y demás miembros del mismo, para que con fundamento en los preceptos relativos de la Ley número 269 doscientos sesenta y nueve de 15 quince de agosto de 1931 mil novecientos treinta y uno, sobre -- fraccionamiento y expropiación de terrenos para la -- creación y fomento de la pequeña propiedad, se expropiaran a la quejosa 139 ciento treinta y nueve hectáreas -- de los terrenos correspondientes al predio denominado -- "La Campana", ubicado en la Congregación de "Buena Vista" del Municipio de Pánuco, Veracruz; y en todos los -- demás actos relacionados que tiendan a despojarla de dichas tierras.

TERCERO: Notifíquese; publíquese; con testimonio -- de esta resolución devuélvanse los autos al Juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el Toca.

ASI, POR MAYORIA DE TRES VOTOS contra los de los -- señores Ministros Aznar Mendoza y Truchuelo, quienes lo emitieron en el sentido de que no debe sobreseerse sino

entrarse al estudio del fondo del negocio, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habiéndose consultado el engrose de este fallo con el señor Ministro Aguirre Garza. El señor Ministro Truchuelo manifestó que formulará voto particular en los términos en que había presentado su proyecto, consultando la confirmación de la sentencia recurrida y la concesión del amparo.

Firman los ciudadanos Presidente y Ministros que integran la Sala, con el Secretario que autoriza.  
PRESIDENTE:

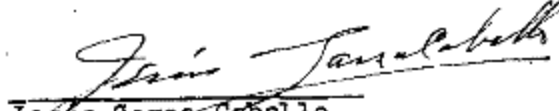
  
Alonso Aznar Mendoza.

MINISTROS:


  
José M. Truchuelo.

  
Agustín Gómez Campos.

  
Agustín Aguirre Garza.

  
Jesús Garza Cabello.

SECRETARIO:

  
A. MORALES.